

Crónica del mes

Marzo/Abril de 1981

Cada mes el proceso salvadoreño parece estrenar una nueva táctica, bajo la iniciativa de un agente distinto. El mes de enero se ensaya la salida militar, bajo la iniciativa del FMLN. En febrero el gobierno de los Estados Unidos intenta la batalla diplomática para secundar su proyecto de eliminación de la oposición armada a la Junta de Gobierno salvadoreño. Ante el fracaso de ambas alternativas, en el mes de marzo se va a intentar la solución política —por la mediación o por el diálogo de un lado, y por las elecciones, del otro—, y en torno a ella se va a librar una nueva batalla entre los sectores de una u otra forma involucrados.

En Panamá se reúne la Internacional Socialista y propone que se intente la mediación para solucionar el conflicto salvadoreño, para lo que encarga a Willy Brandt el que haga contactos con el presidente Reagan a fin de que prospere esa posible salida. La Unión Mundial Demócrata Cristiana, si bien sostiene su apoyo a la Junta salvadoreña, muestra su satisfacción por la propuesta de mediación de la Internacional Socialista; y los presidentes de ambas, Rumor y Brandt, trabajan por esa solución, hasta el punto de programar un encuentro en Alemania entre Duarte y Ungo, propiciado por ambas internacionales. Duarte manifiesta estar abierto al diálogo con la Internacional Socialista, pero las presiones internas le impedirán acudir a la cita. Ungo, por su parte, se muestra renuente a dialogar con Duarte, porque sostiene que no detenta el poder real. Ante el fracaso del intento, la Unión Mundial Demócrata Cristiana anuncia una reunión cimera en San José, a la que concurrirían Frei, Caldera, Rumor y Duarte.

La nueva alternativa impulsa al presidente de Costa Rica, Carazo, a realzar su imagen internacional —tal vez presionado por la aguda crisis

económica y por las primeras muestras de violencia interna— y propone a la OEA como foro internacional para tratar el problema salvadoreño, cosa que secunda el Secretario General, Orfila. Las protestas del gobierno salvadoreño obligan a las pertinentes rectificaciones.

Pero el movimiento de solidaridad con El Salvador apoya entusiastamente la solución política propuesta. Guzmán, Presidente de República Dominicana, se pronuncia contra una fuerza militar continental y apoya la mediación; algo similar hace Torrijos en Panamá, así como Figueiredo del Brasil y muchos funcionarios y parlamentarios europeos. El canciller francés afirma que el sentimiento de la mayoría de los gobiernos y pueblos de Europa está por la solución política. Su colega danés es más claro en sostener que el pueblo salvadoreño lucha por una justa causa contra la opresión, y que él y su gobierno están del lado de los oprimidos. El noruego se pronuncia contra el envío de armas a la Junta, contra la solución militar y contra el manejo que hacen de la situación los Estados Unidos. En fin, los legisladores holandeses y de otros países europeos se manifiestan contrarios a la ayuda de Norteamérica y a la represión que está realizando la Junta salvadoreña.

El FDR declara que está de acuerdo con la mediación y con el diálogo, pero que hay que definir previamente los términos, y que debe participar el gobierno de los Estados Unidos, que es el que verdaderamente manda a través de la Fuerza Armada y de la oligarquía, y no el PDC. Sostiene que siempre han estado abiertos al diálogo, que ya estaba concertado e iniciado, pero que fue cancelado por Reagan a su acceso al poder. El FDR ve bien el que participe la Democracia Cristiana Internacional, e incluso cree que en el proceso del diálogo se podría llegar a hablar con el

mismo gobierno de Duarte. Actualmente siente desconfianza, dado el nivel de represión, la no disposición del gobierno USA, su intervención en El Salvador y la preparación de grandes operativos militares, lo que muestra un gran paralelismo con el proceso de Vietnam, donde la guerra se quiso cubrir con pantallas reformistas (la reforma agraria en ambos países fue planificada por el mismo técnico, el señor Prosterman). Por su parte, voceros del FDR/FMLN declararon en México que como condiciones previas para la mediación o para el diálogo se exigía la libertad de los presos políticos, levantar el toque de queda, y cesar la represión.

Mientras tanto, el brazo armado de la oposición trataba de obtener una posición de fuerza ante una posible negociación. En el mes de marzo se contabilizaron 307 acciones de la guerrilla, de las que 53 fueron combates militares de contención (sobre todo en los departamentos de Cabañas, Morazán y Cuscatlán), 40 ataques a puestos militares (entre ellos, 5 a la embajada USA), 29 enfrentamientos en la zona norte (volviendo inmediatamente a los lugares de los que son sacados por los operativos militares), 16 sabotajes (principalmente al agua y energía eléctrica), 15 sabotajes a edificios públicos y propiedades del Estado (entre los que resaltan 3 contra los ferrocarriles en los que se perdió gran cantidad de mercancía). De acuerdo a manifestaciones de algunos comandantes, se libra actualmente batallas no de defensiva, sino de reagrupamiento, fortalecimiento y mayor desgaste del enemigo.

Tras el fracaso del intento de encuentro en Alemania, Duarte, da un giro, acusa nuevamente al comunismo internacional como de impulsor de la mediación, y pide a los Estados Unidos una ayuda económica de 300 millones de dólares para poder subsistir. Al mismo tiempo, ofrece elecciones libres y nombra un Consejo Central de Elecciones nuevo, con personas aparentemente "independientes". A la vez lanza duros ataques a la derecha y manifiesta que se ha instruido orden de captura contra el ex-mayor D'Aubuisson, por conspirar contra el gobierno.

Las organizaciones permitidas también se pronuncian en torno al tema. La Alianza Productiva, la Cámara de Comercio, la ASI y la ANEP, se manifiestan contrarias al diálogo con la izquierda, ahora que ya está derrotada, critican duramente al "sector político del gobierno" (PDC), y sostienen que el diálogo tiene que ser con ellos, y que la salida son las elecciones. Duar-

te los acusa de ser la extrema derecha, y estas asociaciones se lanzan a una amplia campaña en los medios de comunicación contra las "restricciones" impuestas por el gobierno. D'Aubuisson, por su parte, afirma que hay que eliminar al PDC del gobierno; que el "Escuadrón de la Muerte" es un organismo de autodefensa de los cuerpos de seguridad, y que él mantiene relaciones con oficiales de enlace para pasar información confidencial a la Fuerza Armada. El Partido de Orientación Popular (POP) se pronuncia en contra del diálogo propiciado por gobiernos o instancias extranjeras, y a favor de las elecciones, pero ampliando el gobierno; pone en evidencia al nuevo Consejo Central de Elecciones, en el que dice se encuentran unos que no son profesionales del derecho, y otros que son altos dirigentes del PDC (según propia confesión, dos de ellos renunciaron a sus cargos en el partido el día siguiente de ser nombrados para el Consejo). Bastante similar es la declaración del antiguo partido oficial (PCN), que añade una fuerte crítica al actual gobierno, por la crisis económica y el excesivo incremento de los impuestos, entre otras cosas.

La Fuerza Armada se definió clara y terminantemente contraria a la mediación y al diálogo, por medio de sus más altos representantes. El Ministro de Defensa habló del éxito militar y ofreció las garantías de la institución para unas elecciones libres, a las que se había comprometido, no como antes, que a la institución se le imponía el candidato, pero ella no lo elegía; el Subsecretario llegó a proponer el proyecto de que los militares en activo no emitieran su voto, para mayor garantía. Pero mientras tanto, la Fuerza Armada publicó una lista de 138 personas a las que se les responsabilizaba de los males del país, entre las que estaban todos los principales exponentes de la oposición, incluso democrática y pacifista, miembros del anterior gobierno y Junta, sindicalistas, profesionales, sacerdotes y, ni uno sólo de derechas (ni siquiera D'Aubuisson), supuestamente con el fin de desautorizarlos ante cualquier intento de diálogo o mediación. La aclaración posterior de la Fuerza Armada, ante el clamor de protestas, vino a empeorar todavía el asunto, al sostener que tenían que probar su inocencia.

Al mismo tiempo, se intentaba solucionar militarmente el conflicto antes de que se fuera imponiendo cualquier otra alternativa. Se intensificaron los operativos militares de contrainsur-

gencia, principalmente en Cabañas, Morazán y el cerro de Guazapa, víctima este último de una semana sin descanso de bombardeo del más pesado calibre. Se incrementaron los cateos sistemáticos, los retenes militares y toda clase de medidas represivas. Como consecuencia, en el mes de marzo hubo 1,622 muertos de la población civil (924 de ellos campesinos), de los que 248 cayeron durante el toque de queda; varios maestros más fueron asesinados durante este mes, con lo que los maestros asesinados son ya 16 en lo que va del año (155 desde el 15 de octubre de 1979). Fueron capturados 133 personas entre las que se cuenta el coronel Majano, que fue detenido en Guatemala por "indocumentado", según Duarte, y entregado a las autoridades salvadoreñas que lo retuvieron en el cuartel de la Policía Nacional de San Salvador; luego sería liberado, no se sabe por qué razones o presiones. La prensa internacional también se vio afectada en el mes, ya que se explotó una bomba en el edificio Panamericano, donde tienen sus oficinas ANSA e Interpress Service (ambas italianas), y un furgón de la cadena de TV norteamericana NBC fue atacado con armas de fuego.

Las consecuencias de la represión y del conflicto salvadoreño se ponen de manifiesto, no sólo en los miles de muertos, sino también en los miles de refugiados que tratan de encontrar un lugar más seguro. Según el Ministerio del Interior, desde mayo de 1980 en 105 municipios del país hay 100,260 "desplazados".

Según el Socorro Jurídico del Arzobispado, el número de "refugiados" pasa de los 300,000, de los que 119,000 están en El Salvador, 60,000 en Honduras, 20,000 en Costa Rica, 10,000 en Nicaragua, 15,000 en Panamá, 10,000 en Belice, y 70,000 en México (eso sin contar los que hay en otros países).

Otro de los agentes más importantes en el conflicto salvadoreño es el gobierno de los Estados Unidos. La línea política de la administración Reagan se muestra contraria a la negociación durante este mes. Así se le hizo saber al Secretario General de la Internacional Socialista, Carlsson, alegando que USA no era parte en el conflicto. Tras el fracaso de la ofensiva diplomática, los Estados Unidos optaron por la intensificación de la ayuda militar dirigida a aplastar a los rebeldes, ante el peligro de que una negociación pudiera instalar un régimen totalitario, como ocurrió en Vietnam. Haig se manifiesta en contra de un golpe de ultraderecha y afirma que





el apoyo de Estados Unidos a El Salvador dependerá del que Rusia, Cuba y otros países brinden a la izquierda; su versión de que las religiosas asesinadas en El Salvador podía haberse debido a no haberse detenido en un retén militar y tras un intercambio de disparos, provocó tal indignación en la opinión norteamericana y mundial, que se llegó al emplazamiento público y a la amenaza de un juicio por difamación si no se retractaba. Pero la línea del Departamento de Estado gozaba del apoyo de senadores republicanos, del líder en la Cámara de Representantes (Baker), de la embajadora de las Naciones Unidas (Kirkpatrick), del Jefe del Estado Mayor Conjunto (Jones), y de varios miembros del gobierno y del pentágono. La ayuda militar a El Salvador, además de los 25 millones de dólares primigenios, cuenta con los 66 ya otorgados por Reagan; pero de los 4,270 millones que Haig solicitó para ayudar a los aliados, 216.6 serían destinados para la América Central, y aún estaba pendiente la aprobación de un "fondo de contingencia", de 400 millones de dólares, que utilizaría la Administración a su discreción.

Si nos atenemos a lo publicado por el FDR en su boletín "Va Caliente", 10 aviones llegan diariamente al aeropuerto de Ilopango con toda clase de pertrechos; 100 asesores militares están instalados en la antigua "Ciudad Normal Alberto Masferrer", 15 asesores para grupos de combate (infantería), 14 para helicópteros, 12 para el grupo militar (Embajada USA), 10 para logística (Estado Mayor), 5 para la Fuerza Naval, y 8 agregados militares (diplomáticos); a los que habría que agregar que 78 más se aprestan a venir, incluidos "Boinas Verdes". El gobierno norteamericano dice que un tercio serán retirados en julio, y para septiembre lo sería la mayoría de los restantes, siempre que las condiciones imperantes no exigieran mantenerlos. Por otro lado, se ofrece entrenar a 300 oficiales salvadoreños fuera del territorio nacional. Mientras tanto, y como señal de prepotencia, en Panamá se alistan 5,000 soldados norteamericanos para intervenir en El Salvador, si es preciso, y dos barcos de la Flota Atlántica se pasean por aguas centroamericanas.

La ayuda económica prevista para 1981 se eleva a más de mil millones de dólares, ya que que entre los Estados Unidos y las instituciones financieras mundiales en las que tiene poder decisivo se proponen otorgar 894.4 millones, y se ha presionado para que otros muchos países de to-

dos los continentes aporten otros 210.9 millones.

Sin embargo, la línea adoptada por el gobierno norteamericano está implicando altos costos sociales y políticos. El fracaso militar, al no vencer a las guerrillas, es achacado a fallas en el servicio de inteligencia militar USA, al que se acusa de no saber qué es lo que pasa en El Salvador, y que está sucediendo algo parecido a lo de Irán. El malestar en la opinión pública norteamericana va subiendo, y de las cartas que llegan a la Casa Blanca hay una relación de 10-1 en contra de la política oficial. El senador Kennedy y otros importantes colegas demócratas se manifiestan en contra, y comienzan a presionar por políticas contrarias. Los dirigentes de las iglesias, a una, protestan por la política oficial. El senador Long visita El Salvador y a su regreso declara que debe acelerarse la reforma agraria, que en el asesinato de las religiosas es probable que haya intervención de los cuerpos de seguridad y de personas del ala derecha, que no se deben mantener asesores militares, y que las declaraciones de Reagan en el sentido de no enviar tropas suenan como las que se hicieron en el caso de Vietnam.

A esto hay que agregar la gran coalición que se forma en los Estados Unidos, de parte de muchos grupos sociales y asociaciones, para oponerse al plan económico que recorta considerablemente las prestaciones sociales y eleva drásticamente el presupuesto de guerra. En fin, la crisis interna de poder en la administración se manifiesta más abiertamente en el antagonismo entre Haig y Busch (que parece poder llegar hasta la renuncia del primero), tanto al ser nombrado Busch Presidente del "equipo de manejo de crisis", como, sobre todo, al tomar Haig posesión del control del gobierno tras el atentado contra Reagan, en un gesto más militar que político.

El fracaso de la ofensiva diplomática norteamericana lleva a la administración Reagan a buscar aliados que apoyen su política hacia El Salvador, por lo que se trata de presionar a la Premier británica, Thatcher, al Premier canadiense, Trudeau, al general argentino destinado a Presidente, Viola, y al gobernador de Puerto Rico, Barceló, que acude a Panamá a sellar el compromiso estadounidense de ayuda a la Junta, en cambio, Venezuela se inclina a la postura mexicana, cuyo presidente se pronuncia una vez más contra la ayuda militar. Guatemala y Honduras mantienen silencio, pero sus tropas continúan acantonadas cerca de la frontera, en un cordón sanitario; a Guatemala también se le

complica su situación con el auge de los movimientos armados de izquierda, y tiene que aceptar la independencia de Belice; y a Honduras le surge un conflicto por el secuestro de un avión de SAHSA de parte del Frente Morazanista de Liberación Nacional, que exige y logra la liberación de varios presos políticos —entre ellos muchos salvadoreños, negados por los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores— y otras concesiones y denuncias de intervención en El Salvador y Nicaragua, mientras el PDC hondureño se niega a apoyar a su correspondiente salvadoreño, incluso ante las presiones de la ODCa. Nicaragua protesta reiteradamente por la acusación de intervenir en El Salvador, y ve suspendida la última parte de la ayuda norteamericana, a la vez que denuncia el entrenamiento de cubanos y somocistas en el sur de Florida y sufre repetidos hostigamientos en la frontera; en fin, reestructura la Junta de Reconstrucción Nacional, nombrando a Hassán miembro del Consejo de Gobierno, y a Cruz embajador en Washington, Rusia y China desmienten su participación en el conflicto salvadoreño, pero será Cuba la que tendrá que sufrir mayores consecuencias, primero ante la amenaza de un cerco y una posible agresión, y luego por el enfriamiento de sus relaciones con múltiples países (Perú, Ecuador, Colombia, Portugal, Panamá, Costa Rica y Venezuela).

En todo este contexto, los efectos de la crisis económica del país se hacen sentir cada vez más, y surgen protestas desde los más diversos ámbulos. Surgen el "Comité de los afectados por la Reforma Agraria"; los productores de café exponen su situación de pérdida frente a los precios y a las medidas oficiales aplicadas; se prohíbe la exportación de una serie de productos (entre ellos la sal yodada) para atender al mercado interno; escasea y se encarece la carne por destrucción de parte del hato ganadero como consecuencia de la reforma agraria; el canciller salvadoreño permanece tres días en Honduras para reactivar el intercambio comercial, lo que inquieta a la empresa privada hondureña; la producción industrial está por debajo del 50% de su capacidad; en el café se cosechó menos del 70% de lo previsto. A nivel popular siguen las protestas por el alza desmesurada en las tarifas del agua potable; escasea y se eleva considerablemente el precio de algunos productos básicos, como la sal, el aceite y los huevos. Los transportistas y comerciantes de verduras importadas de Guatemala se quejan de la

escasez de quetzales y de las permanentes trabas que se les ponen. Pero lo que provoca una crisis mayor es el aumento a los combustibles—sin que haya habido un incremento de los precios internacionales—, lo que origina una agria polémica entre los taxistas y propietarios de buses por un lado, y el Ministerio de Economía por el otro, hasta el punto de emplazar al ministro, amenazar con la huelga, incrementar los precios de los pasajes con la consabida protesta del público, lo que lleva a aclaraciones oficiales sobre el subsidio al transporte, el reclamo de la ineficiencia de la medida, y la intervención armada para mantener los precios de los pasajes.

Para tratar de calmar las protestas, Duarte primero viene a tranquilizar a los terratenientes diciendo que la segunda fase de la Reforma Agraria requiere no menos de un período de 5-10 años para su implementación; en segundo lugar afirma que el país se podría endeudar todavía 10-20 veces más e incluso 30 veces, dada su capacidad de pago; luego asegura a la ASI que las reformas al Código de Trabajo les serán presentadas previamente para oír su opinión. Por su parte, el Ministro de Hacienda se declara optimista por los resultados obtenidos con la política de austeridad del gobierno.

Finalmente, un suceso de gran relevancia se daba en el mes de marzo: el primer aniversario del asesinato de Mons. Romero. Mientras en todo el mundo se celebraba como algo excepcional en la historia, incluso en los Estados Unidos, donde en todos los estados y poblaciones se tenían actos religiosos o multitudinarios, en El Salvador tuvo olor a catacumbas; carros blindados flanqueaban todos los costados de la catedral capitalina, y por todas partes había retenes y despliegue de fuerzas. Mons. Rivera se ausentó días antes, para ir a Suramérica, Roma, Alemania y Estados Unidos; antes de su partida escribió un mensaje laudatorio de Mons. Romero y pidió que se celebrara el aniversario en las parroquias. También expresó que tenía confianza en la Junta y en las elecciones, pero que había que limpiar algunos elementos de la administración y del instituto armado; que tenía fe en el diálogo, pues en el FDR hay también personas honestas. Reprochó al Socorro Jurídico su parcialidad, lo que motivó una calurosa defensa del obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo. En fin, dejó la homilía dominical a cargo del capellán de la Policía Nacional Padre Torruella, quien sostuvo que el diálogo es una veleidad, como lo

mostraban los atentados terroristas contra las embajadas de Nicaragua y de los Estados Unidos.

A un año del asesinato de Mons. Romero no se puede decir que la persecución a la Iglesia haya amainado, sino que más bien ha arreciado, como lo prueban los datos del Socorro Jurídico, que denuncia 300 actos de represión a lo largo del período: 56 por el ejército, 31 por la Policía Nacional, 6 por la Policía de Hacienda, 115 por cuerpos combinados, 23 por grupos paramilitares, 6 por el ejército "comandado" por "asesores" USA, 47 por no identificados; 39 de los actos fueron de asesinatos y 46 capturas de sacerdotes, religiosas y seminaristas. Toda una lista que da un claro mentís a las declaraciones de que la Iglesia no es perseguida.

ABRIL

La batalla por la solución política para El Salvador, que se iniciara en el mes anterior, va a ser una de las actividades más importantes en abril, tanto en el nivel nacional como en el internacional.

La solución preconizada por el gobierno, las elecciones, sigue siendo sostenida fuertemente por la Junta y por la Fuerza Armada, así como por los partidos de derechas (PCN, POP y Movilización Democrática Salvadoreña) que no pierden oportunidad de atacar al PDC, e indirectamente por la gran empresa privada al atacar a la izquierda y a la "conspiración extranjera" por la mediación, al tiempo que manifiesta su total apoyo a la Fuerza Armada y le pide que intensifique la contrainsurgencia. En cambio, el FDR sostiene su incredulidad frente a la medida, basado en la historia de fraudes, en la represión actual y en la lista de 138 "terroristas y enemigos de la patria" publicada por el COPREFA, en la que ve mucha similitud con otras elaboradas por el Escuadrón de la Muerte y por la Brigada Anticomunista "General Maximiliano Hernández Martínez"

En cuanto a la otra solución, la de la mediación, son muchos más los actores que intervienen. Tras las primeras posturas del gobierno y de las instituciones oficiales más importantes, en este mes se siguen definiendo las posturas, aunque todavía se perciben ciertas tendencias diferentes. Duarte niega haberse reunido con Ungo y Shafick Handal, rechaza la mediación y el diálogo con condiciones, admite el diálogo con la izquierda únicamente si deponen las armas y justifica la in-

intervención americana por la ayuda extranjera que recibe la guerrilla. El Ministro de Trabajo y Secretario General del PDC a la vez que propone un Diálogo Nacional lanza duros ataques a ambas extremas. En cambio, el Encargado de Negocios de El Salvador en México, Jaime Alberto López, hace declaraciones en el sentido de que su gobierno está dispuesto a aceptar la mediación de México, lo que suscita el inmediato desmentido de parte de la Junta y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, tanto el Ministro de Defensa como el Jefe del Estado Mayor ratifican la postura de Abdul Gutiérrez y ofrecen acabar con la subversión —el verdadero enemigo de la Fuerza Armada— y afirman que el balance de la guerra le es favorable a la Institución; en fin, se le da gran publicidad a un documento del FMLN/FDR, del 3 de febrero, que ha caído en poder de la institución castrense, y en el que se habla de que la mediación sería una táctica para ganar tiempo en la estrategia bélica, pero se calla el que sea nada más un borrador de trabajo y una de tres opciones posibles.

El FDR/FMLN, que ya había definido su posición de principio ante la mediación, va a fijar las condiciones: reconocimiento legal de la izquierda, liberación de los presos políticos, fin a las leyes de excepción, desmilitarización de los servicios públicos esenciales, cese de la masacre indiscriminada contra el pueblo, respeto de los mínimos principios democráticos, garantías para el ingreso al país de la Comisión Político-Diplomática, y respeto de las áreas militares que controla; al mismo tiempo se compromete a: poner un alto a la lucha armada, y colaborar con la reconstrucción del país. Sin embargo, algunas discrepancias se perciben en el seno mismo del FMLN, como se puso de manifiesto por las declaraciones de la Comandante Ana María (2a. de las FPL) en torno a la mediación, que fueron desautorizadas por el FMLN y por la CPD.

En el campo internacional la batalla por la mediación enfrenta principalmente al gobierno de los Estados Unidos y a la Internacional Socialista. La administración Reagan se aferra a la solución militarista: ya ha enviado 342.2 toneladas en armamento, sin contar los helicópteros y otros materiales, y se apresta a enviar aún más (Radio "Venceremos" denuncia la presencia de 500 militares norteamericanos), y nombra embajador ante el gobierno salvadoreño a Deane R. Hinton, quien tuviera que retirarse del mismo puesto en Zaire, acusado de un presunto complot

de la CIA contra el Presidente Mobutu. Pero al interior de los Estados Unidos crece la oposición a la política oficial, y la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprueba, por 26 votos contra 7, una "enmienda" contra la ayuda militar incondicional a El Salvador; las fuerzas democráticas norteamericanas apoyan la mediación, e incluso "The Washington Post" recomienda a Reagan que no se cierre a esa posibilidad.

La Internacional Socialista y la Democracia Cristiana Internacional, por caminos paralelos, trabajan por la mediación o por la solución política para El Salvador. Los presidentes de México y Venezuela, reunidos en la capital azteca, preparan una solución política negociada, y ejercen presión sobre el gobierno salvadoreño para que la acepte, aunque disienten en los mediadores, pues mientras México propone a Ecuador, Panamá y Perú, Venezuela desea a Brasil y Argentina.

En fin, también la Iglesia Católica, a su más alto nivel, trata de influir en la búsqueda de una solución pacífica. El Papa Juan Pablo II, con ocasión de la visita de Mons. Rivera y de los informes que éste le diera en cuanto a la disposición de la izquierda a negociar, muestra su satisfacción y se pronuncia por la negociación, e insiste a Mons. Rivera en que trabaje por esa solución. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, tal vez para quitar autoridad al apoyo eclesiástico, acusa a la Iglesia arquidiocesana de haber utilizado el Comité Ecuménico Salvadoreño de Ayuda Humanitaria (CESAH) para desviar fondos hacia la guerra, incluso acusando a un sacerdote con su nombre y apellido, basado en un documento que cayó en manos del Servicio de Inteligencia Americano.

Mientras se libra la lucha diplomática, la guerra militar sigue con toda su crudeza, buscando ambas partes derrotar al enemigo o conquistar posiciones de fuerza ante una negociación. De parte del gobierno la contrainsurgencia se mantiene o incluso se intensifica. El operativo de Guazapa continúa en abril con gran derroche de recursos. Proliferan los cateos y operativos sistemáticos en la capital y en sus alrededores, y durante la Semana Santa, además de los multiplicados retenes en las carreteras, las playas del país son custodiadas por soldados y elementos de cuerpos de seguridad fuertemente armados. La Fuerza Armada acusa a los periodistas de desinformar sobre la realidad del país y les dirige vela-

das amenazas; sujetos armados "desconocidos" asesinan al periodista Amadeo Mendizábal Martínez (Presidente de ACOPI), resulta muerto también el intérprete periodístico Gilberto George Thurlow y el reportero de El Mundo Joaquín Roberto Zúñiga; al mismo tiempo se mantiene la prohibición de emitir cualquier clase de noticieros radiales.

De ser válidos los números de víctimas de la población civil, el mes de abril arrojaría la más alta cifra incluido el mes de la insurrección general, enero. Efectivamente, serían 2,341 víctimas de la población civil (209 durante el toque de queda), 1,795 de ellas son campesinos muertos a manos de "cuerpos combinados", de los que 1,500 intentaban huir a Honduras, y acorralados por los ejércitos de ambos países habrían sido enterrados vivos en la cueva "La Pintada" (situada en Morazán a inmediaciones de la frontera hondureña), de acuerdo a las versiones dadas por las agencias noticiosas; en caso de ser menor el número de los enterrados vivos en La Pintada, el número total de víctimas del mes bajaría en la misma cantidad. El asesinato de 35 personas de la colonia Montecarlo (Soyapango), que fueron sacadas de sus casas por la Policía de Hacienda durante el toque de queda, motivó una moderada protesta de la administración Reagan. También en Morazán, cantón La Estancia, fueron asesinadas 21 personas de las familias Argueta, Pérez y Mena. Frente a la Embajada Americana fue asesinado Rafael Aguiñada Deras, Secretario General de la Juventud Comunista, e hijo del líder sindical Rafael Aguiñada Carranza, asesinado hace pocos años. En fin, el número de maestros asesinados durante este año se elevó a 25 con los caídos en abril. Durante el mes fueron capturadas 211 personas, la mayoría sin volverse a saber nada de ellas, y entre las que cabe resaltar a muchos obreros sindicalistas, a 75 campesinos que fueron sacados del refugio de la Bermuda por sujetos fuertemente armados, los profesionales Claudia Orozco y Mauricio Aquino, así como la canadiense Monique Gautier. También fue cateado el local de la Cruz Verde.

Un dato que resulta sumamente difícil de comprobar es el número de víctimas de la guerra en ambas partes, ya que los dos bandos tratan de ocultar sus víctimas, exagerar las del enemigo, y denegar las atribuidas por el otro. Sólo disponemos de una información fidedigna, que proporciona un mínimo seguro, dado que se indica el rango y el nombre: la "Nota Luctuosa de la

Fuerza Armada" que se publica en los periódicos; de acuerdo a esa fuente, en lo que va del año han muerto 358 militares, de los que 14 son oficiales, 56 clases, y 288 de tropa; y sólo en abril se publicaron los nombres de 52 (3 oficiales, 3 clases y 46 de tropa). Pero la Fuerza Armada ha seguido incrementando sus efectivos en todos los cuerpos, y sólo en la Guardia Nacional se anunció el ingreso de 1,183 reservistas durante el mes de abril.

Un par de acontecimientos probaron la convivencia de la Fuerza Armada con la extrema derecha, en este caso por la presión estadounidense ya que habían afectado a ciudadanos suyos. La cadena de TV americana CBS difundió la noticia de que existían pruebas de que 6 miembros de la Guardia Nacional habían asesinado a las 3 monjas y a la misionera laica, y el gobierno de Reagan comenzó a ejercer presión para que se les juzgara, mientras, los altos jefes de esa institución lo negaban y pedían pruebas y denuncia oficial para proceder legalmente. Por otro lado, en los mismos Estados Unidos fue arrestado el ciudadano salvadoreño Hans Christ, acusado de haber asesinado a los dos asesores norteamericanos para la Reforma Agraria y al presidente del ISTA Rodolfo Viera (Duarte afirmó que pediría la extradición), y casi simultáneamente era detenido en San Salvador Ricardo Sol Meza, acusado de estar vinculado con el asesinato, quien denegó los cargos aduciendo que estaba en el mismo hotel del crimen con el mayor Mario Denys Morán.

Por su parte, el FMLN intensificó sus acciones durante el mes de abril. En la "guerra de Guazapa" resistieron fuertemente, mantuvieron muchas de las posiciones y contraatacaron varias veces. Entre tanto intensificaban la ofensiva y sobre todo en Chalatenango, Cabañas y San Miguel, tomando varias poblaciones. En los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután, más bien realizaban acciones de hostigamiento y sabotaje o emboscadas y destrucción de torres eléctricas, puentes y carreteras. En San Salvador atacaron la Fuerza Aérea, se tomaron la colonia Santa Lucía, destruyeron con bombas los cines Astor y Viéytez (propiedad de la familia del Ministro de Planificación), incendiaron el Diario Latino, detonaron una bomba en la Cámara de Comercio e Industria, hicieron 3 ataques a la Embajada Americana, se tomaron la ciudad de Apopa durante varias horas, y atacaron instalaciones de energía eléctrica. En total realizaron 336 acciones en 13 de los 14 departamentos del



Controles en El Salvador
Salir a la calle, una aventura que puede ser mortal

país (aparte de las víctimas causadas al enemigo en enfrentamientos), entre las que se cuentan 33 ajusticiamientos, 12 tomas de poblaciones, 78 ataques a puestos militares, 10 ataques a cuarteles importantes, 7 emboscadas a convoyos militares, 25 emboscadas de hostigamiento; y en los departamentos más activos (Cuscatlán y Morazán) se sostuvieron 33 combates militares.

En medio de este conflicto generalizado, y de esta guerra formal —que no se percibe tanto en la capital, a pesar de los retenes y los cateos, o del temor permanente— la economía es también víctima de la contienda. Si bien el recién nombrado Presidente del Banco Central afirma que hay disponibles 2,400 millones de colones de crédito al sector privado para este año, Duarte declara que no hace falta devaluar el colón y que se ha estudiado esa medida; el Ministro de Relaciones Exteriores afirma que el país ha dejado de ser sujeto de crédito, que los Estados Unidos aseguran una ayuda de 123 millones de dólares y que se espera un préstamo de 190 millones de dólares de parte del FMI (de los que los 100 primeros serían para este año), pero que la capacidad industrial del país ha disminuido en un 40-45%; el Ministro de Planificación asiste a la Asamblea de Gobernadores del BID en Madrid, y aprovecha para solicitar más ayudas; lo mismo hacen los más altos funcionarios de Economía y Comercio Exterior, que viajan a distintos países de Europa. El Director del Seguro Social lamenta las dificultades económicas de la institución debidas al cierre de empresas y a la disminución de cotiza-

ciones obreras y patronales. En el ramo de la salud hay quejas de que las consultas a especialistas se fijan para un año o dos más tarde, que muchas de las medicinas recetadas no hay en existencia en la farmacias, que no se les despacha medicinas a los maestros porque Bienestar Magisterial tiene demasiada mora en su cancelación a las farmacias; y en el ramo educativo se lamenta no poder aumentar las pensiones a los maestros jubilados. También los empresarios acusan el problema y aceptan que hay una profunda crisis económica, manifestada en el cierre de empresas, la fuga de capitales (por lo menos 300 millones de dólares), que se entra en el tercer año de crecimiento negativo de la economía, que ha disminuido la producción y que hay grandes dificultades para exportación (entre un 10% y un 15% menos sólo en el café), y que ha aumentado en un 10% el desempleo; por todo lo cual juzgan indispensable la ayuda económica norteamericana. Por su parte el propio Duarte y el Ministro de Trabajo anuncian a fin del mes la entrega del Proyecto del Nuevo Código de Trabajo a representantes obreros, patronales y de medios informativos, para que expresen su opinión. Mientras tanto se multiplican las denuncias sindicales de cateos, capturas, retención carcelaria, despidos, cierres de lugares de trabajos, amenazas; e incluso los pequeños empresarios y la asociación de empresarios de autobuses (AEAS) repiten insistentemente sus quejas.

Sólo resta completar el panorama con una ligera visión de la convulsa Centroamérica.

Guatemala muestra su apoyo a la Junta Salvadoreña capturando al Secretario General del FSR José Sánchez Gallegos, pero los problemas internos con el creciente accionar de la guerrilla no le dejan mucha libertad de acción, a pesar del debilitamiento al salirse de la unidad la agrupación ORPA, acusando al EGP; en vísperas ya de elecciones, el aparato represivo sigue eliminando opositores. Honduras sufre una pequeña crisis política y militar en vísperas de elecciones, y tal vez eso motive el concentrar la atención en litigios fronterizos con Nicaragua; a la liberación de 9 salvadoreños (entre ellos Facundo Guardado) le sigue el arresto de otros salvadoreños, la presunta participación militar en la masacre de "La Pintada", y la denuncia de que diariamente mueren por lo menos tres niños salvadoreños por desnutrición en los campamentos de refugiados que hay en ese país. Costa Rica se debate en la peor crisis económica, que le fuerza a aceptar la condición del FMI de unificar el cambio de la moneda, al tiempo que ve resurgir movimientos guerrilleros, que se quiere identificar con salvadoreños, aunque luego se evidencia que son cos-

tarricenses y motiva el desmentido del FMLN de que estén implicados miembros del FDR. Nicaragua continúa bajo la presión del capital antirrevolucionario apoyado por los Estados Unidos, y se ve complicada en problemas fronterizos con Honduras, desde donde atacan ex-guardias somocistas, pero eso no impide que el propio Ministro del Interior, Tomás Borge, viaje a Venezuela para dialogar con fuerzas políticas en vistas a encontrar una salida política al conflicto salvadoreño. Por otro lado, en cuatro continentes se realizan 39 acciones de solidaridad con el pueblo salvadoreño, una de ellas en Irán, donde se condena la intervención americana.

En estos dos meses, como se ha visto, se está tratando de encontrar una salida política, ya sea por medio de las elecciones, ya por una negociación. De momento ambos caminos se ven cerrados, y será la decisión del gobierno de los Estados Unidos la que incline la balanza hacia uno de los lados. Ojalá entienda el verdadero problema salvadoreño.

Eugenio C. Anaya, h.

